

ITALIA

EL DRAMA SIN FIN DE LOS REFUGIADOS

La crisis migratoria no da señales de mejora. El año pasado, un récord de 181 mil personas lograron entrar a Europa a través de las costas de Italia, procedentes en un 90% de Libia.

Desde 1 de enero han llegado unos 45.000 inmigrantes a las costas italianas, lo que representa un aumento de más del 40% en comparación con el año pasado.

Ante esta situación, el Ministro del Interior, Marco Minniti, que también ha pedido más implicación a Europa, quiere cuadruplicar el número de centros para tratar de acelerar las expulsiones. Por ello se van a acelerar los trámites para obtener el asilo que duraban unos dos años a menos de seis meses y no se tendrá derecho a presentar recurso.

La intención abrir 11 centros, algunos de ellos ya existentes en el pasado, elevando a 1.600 el número total de plazas, ya que Italia cuenta actualmente sólo con cuatro centros operativos.

Las autoridades se están preparando pues para un verano récord, un verdadero éxodo.

Minniti impulsó en el parlamento el mes pasado la adopción de un plan para frenar la migración, que incrementa la expulsión de los que emigraron en busca de un trabajo y prevé una mejor gestión de los que piden asilo político. Se van a acelerar los trámites para obtener el asilo que duraban unos dos años a menos de seis meses y no se tendrá derecho a presentar recurso.

El 60% de los que solicitan el estatuto de refugiado en Italia lo obtiene. Respetando esa nueva política firme, Italia ha deportado a 6.242 extranjeros ilegales entre enero y abril, un 24% más en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre los expulsados figuran emigrantes de los países con los que Italia ha firmado acuerdos bilaterales específicos como Túnez, Egipto, Marruecos. Otros son indocumentados a los que expiró la visa de turista o estudiante.

Polémica sobre ONGs y tráfico de inmigrantes.-

La polémica en Italia sobre presuntos vínculos de organizaciones no gubernamentales (ONG) con el tráfico de personas prosigue su curso a la espera de evidencias, entre suposiciones y sospechas. El debate alcanzó

tales decibeles, que el gobierno llamó a la cordura y el Consejo Superior de la Magistratura decidió evaluar la conducta del procurador de Catania, Carmelo Zuccaro, uno de los promotores del conflicto junto al director de la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras (Frontex). En los últimos días tanto uno como otro se pronunciaron sobre el tema en declaraciones a la prensa y comparencias ante comisiones del parlamento, con lo cual tendieron un manto de dudas sobre la actuación de las ONG en las operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo central. El asunto recibió una intensa cobertura mediática y con el mismo vigor partidos políticos de oposición se incorporaron a la discusión con fuertes acusaciones contra las agrupaciones y el gobierno.

Frontex se desmarcó del problema y a través de su portavoz, Izabella Cooper, aseguró que 'no ha acusado nunca a las ONG de nada', sino sencillamente publicó un informe en el cual se refirió a cómo cambió el modo de operar de los traficantes en Libia.

En declaraciones al servicio televisivo informativo Rainews 24, la funcionaria explicó que en los últimos dos años las unidades de superficie que participan en las tareas de socorro se aproximan hasta el límite de las aguas territoriales libias, de lo cual se aprovechan los contrabandistas.

Al responder a la pregunta de si no se justificaba el acercamiento a las costas libias para evitar naufragios, Cooper respondió que 'salvar vidas no es sólo una prioridad, sino una obligación internacional', de la cual se sirven los delincuentes.

La presencia de las ONG comenzó en 2014 cuando la Operación Mare Nostrum, creada el año anterior por el gobierno italiano para salvar vidas, fue sustituida por la Tritón, iniciativa europea cuyo encargo es la vigilancia en aguas internacionales a una distancia no mayor de 30 millas de las costas italianas. El objetivo de la misión dirigida por Frontex es el control y protección de los límites marítimos, no las tareas de búsqueda y rescate, en las cuales interviene sólo en casos de necesidad, con un presupuesto de 2,9 millones de euros mensuales comparados con el de 9,1 de su antecesora. El vacío dejado por la salida de Mare Nostrum fue ocupado, en menor medida, por organizaciones como Médicos sin Fronteras, Save the children, SOS Mediterráneo, ProActive Open Arms y Moas, entre otras. Alrededor de una decena de ellas, con diferentes misiones, 14 barcos adaptados y un avión de reconocimiento, participan en las tareas de socorro incorporadas al sistema coordinado desde Roma por la Guardia Costera italiana, con mil 450 personas asistidas en 2014; 20 mil 63 en 2015; y 46 mil 796 en 2016. El ex primer ministro Enrico Letta, bajo cuyo gobierno funcionó Mare Nostrum, recuerda que aquella operación fue también calificada como un factor estimulador de la inmigración, pero sin embargo, 'cuando se cerró, se triplicaron los

desembarcos y aumentaron las muertes en el mar'. En entrevista concedida a La Repubblica, el ex jefe de gobierno advirtió que mientras se mantengan vigentes los factores que obligan a los migrantes a abandonar sus lugares de residencia, el flujo será incontenible. Existe -precisó- una subestimación del nivel de desesperación que lleva a alguien a arriesgar la vida y con mucha frecuencia morir, con tal de arribar a Europa.

El dirigente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi di Maio, ha calificado de "taxis del Mediterráneo" a las organizaciones humanitarias que rescatan a inmigrantes en el mar y pidió aclarar sus fuentes de financiación. "Queremos verlo claro, saber quién las financia. A quien dice que en este momento es inoportuno atacar, le digo que forman parte de ese grupo de hipócritas que simula siempre no ver el negocio de la inmigración", dijo hoy a la prensa tras un acto en Mondragone (sur). Ya el pasado viernes el también vicepresidente de la Cámara de los Diputados se refirió de dicho modo a estas organizaciones, lo que provocó cierta controversia y le valió numerosas críticas. Di Maio se dirigió hoy por Facebook a quienes han criticado sus palabras para decirles que "se ha acabado el tiempo de la hipocresía" y para asegurar que el término "taxi del Mediterráneo" ya fue usado por la agencia europea Frontex en un informe. El diputado volvió a hacer hincapié en el supuesto "negocio con la inmigración" y aludió al caso de Salvatore Buzzi, detenido por crear supuestamente una red de corruptelas en el ayuntamiento romano y por enriquecerse mediante la gestión de centros de inmigrantes.

Tras su arresto en diciembre de 2014 por el escándalo "Mafia Capital", trascendió una frase atribuida a él: que "los inmigrantes producen más dinero que la droga". El político subrayó que hay una investigación de la Fiscalía italiana y dos informes de Frontex que "acusan a las ONG no solo de tratar con los traficantes de personas sino incluso de haber dejado a los criminales usar directamente sus naves para transportar a los inmigrantes". "Leyendo estas noticias, las preguntas que me hago como ciudadano italiano son: '¿Quién pone el dinero? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Quién paga estos taxis?'. Llegaremos hasta el fondo del asunto", aseguró. En las aguas que separan el sur italiano del norte de África operan las naves de las autoridades italianas y las enviadas por la Unión Europea, pero también las de varias ONG de Francia, Alemania, Malta o España, que participan en los rescates de inmigrantes.

La agencia europea Frontex considera que la presencia de las ONG genera un "efecto llamada" y anima a las mafias a usar embarcaciones más baratas y peligrosas, como las lanchas neumáticas, ya que los inmigrantes son rescatados en los confines de las aguas libias. Una de las organizaciones humanitarias que asisten a los inmigrantes es la española Proactiva Open Arms, cuyo director, Óscar Camps, se reunió la semana pasada con el papa Francisco en el Vaticano para explicarle la situación

que se vive en el mar. Camps, quien aseguró que su ONG se financia con donaciones, dijo que cuando las críticas llegan "a través de los medios de comunicación y no a través de los mecanismos judiciales oportunos, es porque lo que se busca no es juzgar o culpar sino difundir y difamar", por lo que avanzó que continuarán con las operaciones.

Desde Cáritas piden también que no se generalice y que se penalice a quien se beneficie de esta situación

